PLAZA PUBLICA

Miguel Angel Granados Chapa

- Desaparición de poderes
- El caso de Tamaulipas

Cuatro partidos de oposición buscaban que el Senado ejerciera la atribución que el artículo 76 constitucional le confiere respecto de la desaparición de poderes de una entidad, para derribar al gobernador Américo Villarreal. No lo consiguieron, entre otras cosas porque estaba mal planteada su solicitud. ■ 4

30-Junio-1991-

Antaño, hubo a menudo una interpretación caprichosa, convenenciera y errónea de la disposición constitucional relativa. Se le otorga al Senado no la facultad para declarar desaparecidos los poderes, sino para declarar, cuando han desaparecido los poderes, que ha llegado el momento de nombrar un gobernador provisional. Y sin embargo, más de una vez la Cámara alta asumió que sus miembros, como si fueran magos, podrían decretar la desaparición de los poderes de la entidad.

No había, además, hasta hace 12 años, base legal alguna que permitiera a los legisladores establecer con alguna precisión cuándo es que habían desaparecido los poderes y era preciso, por lo tanto, proveer a la integración de nuevos, comenzando por la designación de un gobernador provisional que convocara a nuevas elecciones. Las últimas veces que se aplicó el mecanismo, en enero y abril

de 1975, era tan evidente la motivación circunstancial, no fundada en derecho, de la medida, que ni siquiera se reclamó al Senado que la aplicara a derechas.

En el primer caso, en efecto, era conocida la aversión que el gobernador electo Rubén Figueroa tenía contra el interino Israel Noguera Otero. Aquél había jurado que no recibiría de las manos de éste, en abril de 1975, las riendas del gobierno de Guerrero, y para hacer honor a su palabra pidió a su amigo el Presidente Luis Echeverría que lo destituyera. En vez de forzarlo a pedir licencia, como se ha estilado con posterioridad, se hizo intervenir al Senado y se declaró que los poderes estatales habían quedado suprimidos.

Algo más complicada fue la situación hidalguense en octubre de 1974. El gobernador Manuel Sánchez Vite se adelantó a Echeverría, de quien ha sido estrechísimo amigo pero a la sazón estaban convertidos en acres enemigos, y *destapó* al doctor Otoniel Miranda para que

lo sucediera en la gubernatura. Por alguna razón, el Presidente tuvo que aprehender con ese *madrugete*, pero sólo se guardó el rencor. Miranda ganó las elecciones y tomó posesión el primero de abril siguiente. Menos de un mes más tarde, se creó de modo artificial una agitación agraria que concluyó con la declaratoria senatorial sobre la desaparición de poderes.

En 1939 se había intentado emitir una ley orgánica de tal facultad senatorial, sin éxito. No fue sino hasta 1978 en que al fin se consiguió ese propósito. Y ¡oh paradoja!, a partir de ese momento tal mecanismo ha dejado de aplicarse. Los opositores a Villarreal Guerra querían ponerlo en movimiento nuevamente pero, como se verá enseguida, no se cumplía ninguna de las condiciones previstas en esa ley.

Se requiere, como muestra de que los poderes han desaparecido, que se aprecie una de estas circunstancias:

a) Que los poderes locales quebranten

los principios del régimen federal (por ejemplo, que dejen de enviar los impuestos federales que recauden).

b) Que los titulares de los poderes abandonen el ejercicio de sus funciones sin causa de fuerza mayor. Y, como se sabe, eso no ha ocurrido.

c) Que estuvieran físicamente imposibilitados para el ejercicio gubernamental por situaciones o conflictos causados por ellos mismos, que afectaran la vida del estado y la vigencia del orden jurídico.

d) Que los titulares de los poderes permanecieran en ellos más allá del término para el cual fueron elegidos o nombrados, siendo además que las elecciones respectivas no se hubieran llevado a cabo.

e) Que propusieran o adoptaran formas de gobierno u organización política distintas de las establecidas en la Constitución.

Para bien y para mal, será muy difícil que, en tales circunstancias, se llegue al caso de la desaparición de poderes.